Sentencia 2

Tipo de asunto y número de expediente	Amparo indirecto 963/2019
Órgano jurisdiccional	Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Sonora
Juez de Distrito	Jesús Edgardo González Ortiz
Parte quejosa y/o recurrente	Mujer a la que fue negada una interrupción del embarazo y su pareja
Autoridad responsable y/o órgano jurisdiccional cuya sentencia se recurre	<ul style="list-style-type: none">• Doctora que se negó a realizar la interrupción del embarazo• Director del Hospital Integral de la Mujer del Estado de Sonora• Congreso del Estado de Sonora• Gobernadora Constitucional del Estado de Sonora
Fecha de la sentencia	21/08/2020

Tema: Obligación de las autoridades médicas de garantizar la interrupción del embarazo a partir del derecho a la salud y a la autonomía de las mujeres.

¿Qué pasó?

- Una mujer embarazada solicitó la interrupción de su embarazo luego de recibir diversos diagnósticos sobre malformaciones genéticas del feto, lo que llevó a concluir que había poca probabilidad de que el embarazo llegara a término, que el producto naciera con vida y, además, se identificó un posible riesgo a la salud de la madre, ahora quejosa.
- La doctora que recibió la solicitud se negó a realizar la interrupción, ya que argumentó que los problemas de salud del producto solo le afectaban a éste y no a la madre. De igual forma, la doctora indicó que lo único que podía hacer era cuidar la gestación y, en cualquier caso, esperar a que el producto dejara de tener signos vitales para realizar el procedimiento de expulsión.
- Ante dicha negativa, la mujer debió acudir a un hospital en la Ciudad de México, en donde una vez más confirmaron el diagnóstico sobre el riesgo de salud tanto para el feto como para la madre y procedieron a realizar la interrupción que fue negada en Sonora.
- A la par, la mujer y su pareja promovieron un juicio de amparo indirecto, indicando que tanto la médica como el hospital en donde se negó la interrupción del embarazo violaron sus derechos a la salud, el

derecho a la autonomía reproductiva y el derecho a la igualdad y no discriminación de la mujer.

¿Qué resolvió el Juzgado?

- Estimó correctos los argumentos de la mujer quejosa y su pareja, confirmando que las autoridades demandadas atentaron contra el derecho a la salud de la mujer que solicitó la interrupción del embarazo y, como víctima indirecta, violaron también los derechos fundamentales de su pareja y padre del producto, por el daño emocional causado.
- El Juzgado indicó que el derecho a la salud reconocido en el artículo 4º constitucional y diversos instrumentos internacionales, se debe entender como el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física, mental y social, tomando en consideración las distintas dimensiones y actividades en las vidas de las personas. Este derecho resulta en una serie de deberes complejos a los poderes del Estado, hospitales tanto públicos como privados y al personal médico. En particular, el derecho a la salud también implica una obligación de abstenerse de imponer prácticas discriminatorias que limiten la salud de las personas y, en específico, las necesidades de las mujeres y sus derechos sexuales y reproductivos.
- Asimismo, el Juzgado consideró importante juzgar con perspectiva de género, ya que las mujeres tienen derecho al estado más alto de salud sin coacción ni discriminación, lo que incluye una obligación de prevenir riesgos asociados con la maternidad y el embarazo. En específico, existe la obligación de tomar las medidas necesarias para que la interrupción del embarazo sea posible, disponible, segura y accesible cuando existe un riesgo sobre la salud de las mujeres. De igual manera, y considerando que la terminación de un embarazo también constituye un ejercicio de los derechos a la libertad, autonomía y libre desarrollo de la personalidad de las mujeres, la interrupción del embarazo de manera segura y oportuna por las instituciones de salud debe realizarse cuando la mujer considere que la continuación de su embarazo es incompatible con su proyecto de vida.
- En ese sentido, no es simplemente necesario reconocer dicha autonomía, sino que debe existir la infraestructura y el personal para ejecutar la voluntad de las mujeres.
- En el caso concreto, las autoridades no evaluaron el derecho a la salud de la mujer en términos integrales, ya que solo se enfocaron en las afectaciones fetales y no sus implicaciones sobre la salud emocional, mental y posiblemente física de la madre.
- Por lo tanto, la negativa de las autoridades constituyó un trato cruel, inhumano y degradante, ya que las autoridades obligaron a la quejosa a soportar el riesgo del embarazo a su salud física y emocional e ignoraron su derecho de autonomía y capacidad de

decisión, para así garantizar una interrupción segura y médicamente vigilada.

- Asimismo, el Juzgado reconoció la calidad de víctima indirecta de la pareja de la mujer quejosa, ya que la negativa de realizar la interrupción del embarazo por las autoridades y las medidas que debieron tomar ante dicha negativa resultaron en afectaciones a su salud mental.

- El Juzgado resolvió conceder el amparo a la mujer quejosa y su pareja, reconociéndoles el carácter de víctimas conforme al artículo 4 de la Ley General de Víctimas. Ante dicho reconocimiento, el Juzgado también ordenó una serie de medidas de rehabilitación, compensación, satisfacción y no repetición, con el objetivo de garantizar una reparación integral de la violación a los derechos humanos de la mujer quejosa y su pareja.